

OBSERVATORIO DE LA COYUNTURA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Informe N°2 - Octubre 2019

Octubre: Crisis del bloque neoliberal conservador,
Golpe en Bolivia y un escenario abierto

Índice

Introducción	3
1. Crisis políticas de gobiernos neoliberales	4
a. Chile despertó	5
b. Ecuador contra el «paquetazo» de Lenin Moreno y el FMI	9
c. Haití en llamas	11
d. Honduras: proceso judicial en EE. UU. y movilizaciones “contra el narcogobierno”	13
e. Panamá: Movilizaciones contra las reformas constitucionales	14
2. Disputas en el terreno electoral e institucional	16
a. Bolivia: del triunfo electoral de Evo a la gestación del golpe de Estado	17
b. Uruguay: el Frente Amplio y el Partido Nacional al balotaje	19
c. Argentina: Derrota de Macri en primera vuelta, Alberto Fernández electo presidente	21
d. Perú y la crisis parlamentaria: Elecciones 2020 y alianzas	22
3. Avances y contragolpes del bloque neoliberal conservador	23
a. Brasil: de las contrarreformas económicas y geopolíticas a Lula libre	24
b. EE. UU. y tratado con el Triángulo Norte por asilo migratorio	26
c. Profundización del Bloqueo contra Cuba	27
d. Venezuela, termómetro de la disputa continental	28
Apuntes finales	29

Introducción

Octubre 2019: Crisis del bloque neoliberal conservador, Golpe en Bolivia y un escenario abierto

La ofensiva capitalista en su versión neoliberal-conservadora enfrentó durante el mes de octubre una de sus más importantes crisis de los últimos años. Las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe en este mes dan cuenta tanto de los límites que encuentra esta ofensiva y de los errores de la derecha latinoamericana, como de las recetas neoliberales para tratar los problemas sociales y la protesta, y de la capacidad de los pueblos de Nuestra América para responder ante los efectos sociales de estas políticas. En similar dirección, aunque en un contexto más heterogéneo, muchos de los resultados electorales y de los conflictos institucionales que tuvieron lugar en este mes parecen expresar también esta pérdida de legitimidad de la ola neoliberal que se desplegó a nivel regional en los últimos años.

Lo anterior no elude que, al mismo tiempo, el bloque conservador continuó desplegando sus iniciativas a partir de dos movimientos básicos: por un lado, con los intentos de avanzar con las llamadas «reformas estructurales» y, frente a los cuestionamientos sociales, haciendo uso de la violencia y la represión; y, por el otro, con su proyecto de debilitar y desestabilizar los gobiernos que no se alinean con sus mandatos mediante la aplicación de las formas de la guerra híbrida.

Esta contraposición entre la crisis de legitimidad de los proyectos neoliberales e imperiales y sus avances y contragolpes atraviesan este mes de octubre, que es el periodo específico de los sucesos económicos, sociales y políticos que se examinan en este informe. Se trata de un momento político donde queda expuesta con toda crudeza una batalla regional abierta que, en el primer fin de semana de noviembre, se expresó tanto en la libertad de Lula Da Silva en Brasil –luego de 580 días injustamente preso-, como en la consumación trágica del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Acontecidos fuera del mes que abordamos en esta ocasión, ambos desenlaces hunden sus raíces en procesos que se analizan en estas páginas.

Octubre se configuró entonces como un mes que demostró en qué medida la región continúa estando en disputa, con un escenario dinámico y por momentos imprevisible.





Crisis políticas de gobiernos neoliberales

Fotografía: Susana Hidalgo

Chile despertó

A partir de la segunda quincena de octubre se desarrolló en Chile un proceso de movilización popular que aún está lejos de aplacarse. La cronología del conflicto es significativa.

En un nivel superficial, todo arrancó a partir de una protesta estudiantil en rechazo al aumento del precio del transporte, que los primeros días de octubre aumentó de \$800 a \$830. Ante esto, estudiantes secundarios comenzaron a eludir el pago en el Metro de la capital del país, Santiago de Chile, desde los primeros días de octubre. «Evadir / no pagar / otra forma de luchar» fue una de las consignas utilizadas en las llamadas «evasiones masivas». Con el correr de las jornadas, el movimiento fue ganando en masividad y comenzaron a sumarse estudiantes de Universidades, mientras el sindicato de trabajadores del Metro se solidarizó con las medidas de lucha. El 18 de octubre el gobierno reprimió este tipo de protestas en el Metro y a partir de ese momento, el proceso se aceleró. Al día siguiente, miles de chilenos y chilenas de todas las edades salieron a manifestarse repudiando al gobierno. La respuesta fue el aumento de la represión: Piñera decretó el estado de emergencia —inédito desde el fin de la dictadura—, sacó las fuerzas armadas a la calle y declaró el toque de queda en algunas ciudades¹. Sin embargo, el pueblo chileno continuó una y otra vez desafiando a las autoridades con marchas,

concentraciones y cacerolazos cada vez más masivos y Piñera tuvo que dar marcha atrás con el aumento.

A esa altura, las demandas populares ya habían dejado atrás el alza del boleto, configurándose un conjunto de exigencias superpuestas, que iban desde el fin inmediato de la represión hasta el cambio de la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, pasando por el fin del sistema privado de pensiones llamado AFP, el acceso a educación y salud y la renuncia del propio presidente, entre muchas otras. «No son 30 pesos, son 30 años», fue la consigna que graficó la profundidad de la crisis y el alcance del malestar, que va mucho más allá de una medida puntual, poniendo en cuestión el propio modelo económico sostenido por el bipartidismo chileno.

Sin comprender la magnitud de la protesta, Piñera arrojó el 20 de octubre una frase dirigida a quedar por mucho tiempo en la memoria política: «Estamos en guerra contra un enemigo poderosos, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite», expresó el presidente, mientras continuaba ordenando la represión. Apenas dos días después tuvo que salir a pedir “perdón por esta falta de visión” y a ofrecer tardíamente



algunas concesiones: un ingreso mínimo garantizado de \$380 000 (cifra cercana al costo de alquilar un departamento de 2 ambientes), un aumento del 20% en el valor de las pensiones, el establecimiento de un seguro de enfermedades catastróficas, la creación de un mecanismo que evite el aumento de las tarifas eléctricas y un aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos para financiar estos programas².

Mientrastanto, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la rebaja de los salarios de sus integrantes y también en esta semana —aunque en este caso con la abstención o el rechazo de la mayoría de los legisladores oficialistas— dio curso al proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, presentado por Karol Cariola y Camila Vallejo, del Partido Comunista. El proyecto de ley, que antes de las protestas no tenía pronóstico de trámite sencillo, fue aprobado por un amplio margen —88 por la afirmativa, 24 por la negativa, 27 abstenciones— y pasó al Senado³.

Pese a todo, el pueblo chileno continuó incrementando la movilización, alcanzando el 25 de octubre la marcha más masiva al menos en varias décadas, con una participación de alrededor de un millón de personas. Ese día, además, un grupo de activistas virtuales hackearon el sitio web de Carabineros, la policía de Chile, y comenzaron a divulgar información de todo tipo, en un operativo conocido como #PacoLeaks⁴. Entre las revelaciones más destacadas se encuentran gran cantidad de evidencias respecto a operaciones secretas de espionaje y monitoreo a diferentes grupos y activistas sociales que realizan actividades legales y públicas.

Luego de esa jornada, el gobierno decidió cambiar de táctica: Piñera elogió el carácter pacífico de la movilización y anunció

dos medidas importantes. La primera fue el pedido de renuncia de todo su gabinete, que luego en realidad se convirtió en una modificación parcial, con varios enroques, aunque sí incluyó la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el centro de la tormenta como máximo responsable —luego del propio presidente— de las fuerzas policiales. Mejor suerte tuvo el ministro de Defensa y responsable por las Fuerzas Armadas, Alberto Espina, que mantuvo su cargo. La segunda medida de ese fin de semana fue que Piñera, «luego de conversar con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad» anunció el fin de la declaración del «estado de emergencia»⁵, que había habilitado la participación de militares en la represión.

De acuerdo a organismos oficiales el saldo de la represión estatal ascendió a fines de octubre a 5 personas asesinadas, 18 víctimas de violencia sexual, 120 casos de torturas, más de 4 mil detenidos (incluyendo la cifra de 471 niños, niñas y adolescentes) y 1305 personas heridas, entre las cuales cabe destacar más de 300 por armas de fuego⁶. En tanto que diversos reportes dan cuenta de al menos 20 asesinatos en el período —aunque hay versiones encontradas respecto a cuántas de ellas corresponden a la represión— y la Cruz Roja sostiene que «el INDH [Instituto Nacional de Derechos Humanos] se quedó corto» y hay al menos 2500 personas heridas⁷.

En este contexto, diputadas y diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista se abocaron a reunir firmas dentro de la Cámara para destituir al presidente Piñera a través del mecanismo de acusación constitucional. El 27 de octubre informaron que habían superado las 10 firmas necesarias para iniciar el trámite, aunque es incierta la suerte que puede correr en el Parlamento, donde la izquierda está en minoría. Por otro lado, estos partidos continúan debatiendo diversas iniciativas

para impulsar una reforma constitucional. Esta demanda se encuentra cada vez más en el centro de las protestas e incluso los propios partidos que han conducido el sistema político post-dictadura la terminaron incluyendo de algún modo en su agenda, apurados por las movilizaciones.

En el plano del movimiento social, durante las protestas se consolidó un espacio llamado Unidad Social, que articula a decenas de organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y muchas otras de diversos sectores. Esta articulación convocó a huelga general para los días 23 y 24 y luego para el 30 de octubre e intenta canalizar la movilización hacia espacios de participación popular denominados Cabildos, que se desarrollan entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en diversos puntos del país.

Es interesante notar que Unidad Social preexiste a la crisis desarrollada en las últimas semanas, habiéndose estructurado a partir de los primeros días de agosto para convocar a una jornada de protesta nacional desarrollada el 5 de septiembre, con una serie de consignas que a esta hora parecieran casi proféticas. «Nos cansamos. Nos unimos» fue en ese momento el nombre de la convocatoria, que en su manifiesto ofrece una descripción de la situación previa al estallido, desde la perspectiva del movimiento popular: «Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias, las desigualdades y la impunidad y

al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran parte de las instituciones de la República»⁸. Los episodios posteriores parecen dar la razón a este análisis político, que en ese momento tal vez no estaba tan claro pero que hoy se expresa con un cambio radical en el escenario.

En una comunicación que ilustró la situación política en que ha quedado el sistema, el presidente Sebastián Piñera anunció el 30 de octubre que decidió cancelar las cumbres de la APEC (sigla que en inglés significa Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) y la COP25 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). El motivo esgrimido: «garantizar el orden y la paz social, enfocarnos en el diálogo y en una “Nueva Agenda Social para dar soluciones urgentes a principales demandas», de acuerdo a lo informado en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a datos difundidos por la consultora CADEM, la popularidad del presidente Piñera se derrumbó: el 25 de octubre se ubicó en el 14%⁹, lo cual contrasta con otra encuesta difundida con solo dos semanas de anterioridad, que le daba una aprobación del 31%¹⁰. «Al mismo tiempo, la percepción de que Chile va por buen camino alcanzó sólo 22%, 50 puntos porcentuales menos que en marzo del 2018. Descontento social (41%), alto costo de la vida (18%), delincuencia y vandalismo (15%), malos políticos (13%), desigualdad (12%), mala evaluación del gobierno (12%) y la presencia de las FF.AA son las principales razones que explican esta jornada de violencia y manifestaciones», señaló el Estudio 302 de esta consultora, que no puede ser tildada de opositora al gobierno de Piñera¹¹.



El estallido social chileno ofrece múltiples interrogantes respecto a la orientación que asumirá en cuanto al saldo político interno, aunque es evidente que las presiones hacia los cambios persistirán y el gobierno queda en extremo debilitado. A nivel internacional, y en particular latinoamericano, se trata de una crisis que golpea la legitimidad del neoliberalismo como proyecto político, sumándose a los procesos en otros países que relevamos también en este informe. El caso de Chile es paradigmático porque se trata del país considerado ejemplo para gobiernos derechistas e instituciones y voceros ligados al poder financiero global.

En este sentido, cabe destacar que a nivel internacional las formaciones alineadas a la derecha del arco político intentaron —con poco éxito— instalar la idea de que el Foro de Sao Paulo o incluso específicamente los gobiernos de Cuba y Venezuela se encontraban detrás de los disturbios con la intención de desestabilizar al gobierno e implantar un modelo socialista. Entre muchos otros, fue Juan Guaidó quien sostuvo esta tesis y apuntó directamente al chavismo: «Es evidente que Maduro es un incapaz y no puede controlar la producción petrolera de Venezuela, pero sí tiene capacidad de financiar, a través del oro que extraen de las minas y el arco minero, a diferentes grupos e infiltrar protestas para generar violencia y desestabilizar a la región», expresó¹². Sin embargo, no ofreció ningún elemento informativo concreto y el carácter de las protestas parecen desmentir esta especulación.



Notas

¹ Piñera sucumbe ante la mayor protesta callejera en décadas y decreta estado de emergencia en la capital (19 de octubre de 2019). El Desconcierto. Recuperado de <https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/19/pinera-sucumbe-ante-la-mayor-protesta-callejera-en-decadas-y-decreta-estado-de-emergencia-en-la-capital/>

² Piñera ya no habla de guerra, pide perdón y abre la billetera fiscal pero no anuncia cambios estructurales ni en su gabinete (23 de Octubre de 2019). El Mostrador. Recuperado de <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/23/pinera-no-habla-de-guerra-pide-perdon-y-abre-la-billetera-pero-no-anuncia-cambios-estructurales-ni-en-su-gabinete/>

³ En medio del estallido social, diputados aprueba el proyecto para reducir la jornada laboral. Nodal. Recuperado de <https://www.nodal.am/2019/10/chile-en-medio-del-estallido-social-diputados-aprueba-el-proyecto-para-reducir-la-jornada-laboral/>

⁴ #PacoLeaks ~ Datadump de Carabineros de Chile (Pacos culiaos) (25 de octubre de 2019). Rebelside. Recuperado de <https://pacoleaks.rebelside.pw>

⁵ Comunicado de Prensa Presidencia de la República (27 de octubre de 2019). Prensa Presidencia de Chile. Recuperado de https://twitter.com/presidencia_cl/status/1188529181740666880

⁶ Reporte 31-10-19 (31 de octubre de 2019). INDH. Recuperado de <https://twitter.com/inddhh/status/118976001082327744?s=20>

⁷ Cruz Roja en Chile eleva cifra de heridos a más de 2.500 personas: «El INDH se quedó corto». El Ciudadano. Recuperado de <https://www.elciudadano.com/chile/cruz-roja-en-chile-eleva-cifra-de-heridos-a-mas-de-2-500-personas-el-indh-se-quedo-corto/11/03/>

⁸ A los movimientos y organizaciones sociales de Chile. Manifiesto convocatoria (4 de agosto de 2019). Unidad Social. Recuperado de <https://unidadesocial.cl/manifiesto-unidad-social-2/>

⁹ Estudio N° 300 (13 de octubre de 2019). CADEM. Recuperado de <http://www.cadem.cl/encuestas/estudio-no-300-14-de-octubre/>

¹⁰ Estudio N° 302 (27 de octubre de 2019). CADEM. Recuperado de <http://www.cadem.cl/encuestas/estudio-no-302-25-de-octubre/>

¹¹ Cadem: el estrecho vínculo con Piñera de la encuesta que marca la agenda política (29 de mayo de 2017). El Mostrador. Recuperado de <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/29/cadem-el-estrecho-vinculo-con-pinera-de-la-encuesta-que-marca-la-agenda-politica/>

¹² Guaidó asegura que Maduro está financiando las manifestaciones en Chile y Ecuador (24 de octubre de 2019). El Desconcierto. Recuperado de <https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/24/guaido-asegura-que-maduro-esta-financiando-las-manifestaciones-en-chile-y-ecuador/>



Ecuador contra el «paquetazo» de Lenin Moreno y el FMI

El mes de octubre inició en Ecuador con el anuncio del presidente Lenin Moreno de implementar una serie de medidas económicas, laborales y tributarias sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, a partir del acuerdo que firmaron ambas partes en marzo de 2019, denominado por la sociedad ecuatoriana como un «paquetazo» contra las clases populares del país.

Dentro de las diferentes medidas se incluía el aumento de más de 123 por ciento en el precio de los combustibles, hecho que funcionó como detonante para la crisis política que venía contenida en Ecuador a cuenta del viraje político de Lenin Moreno posterior a haber asumido la presidencia en 2017.

La creciente deslegitimidad del gobierno de Moreno está vinculada a la ruptura del pacto de gobernabilidad dentro de la Revolución Ciudadana, que fue signado inicialmente por la utilización del Poder Judicial como herramienta de acción política contra el expresidente Rafael Correa y su misma fórmula vicepresidencial con la que llegó al gobierno, Jorge Glas. De inmediato fue visible la cercanía de Moreno con los

principales sectores de la derecha latinoamericana. Como parte activa del Grupo de Lima, participó en el apoyo a un golpe de Estado en Venezuela, y siguió la receta de los Estados Unidos para desprestigiar a la Revolución Bolivariana. La entrega del periodista Julian Assange a la policía de Gran Bretaña fue otra muestra de la complacencia del gobierno de Moreno con las necesidades de los Estados Unidos. A su vez, impulsó una serie de reformas económicas que terminaron acercando nuevamente a Ecuador al Fondo Monetario Internacional.

Es en este contexto que la decisión del 2 de Octubre de impulsar una serie de medidas económicas —como el alza del combustible— fue la gota que derramó el vaso del descontento social: miles de personas vinculadas a diversos sectores sociales, principalmente los y las campesinas e indígenas, salieron a movilizarse a las calles de las principales ciudades de Ecuador, entre ellas Quito y Guayaquil, en el marco de los paros convocados en estas ciudades por el sector del transporte, generando un bloqueo importante en las principales vías. Frente a esto, el gobierno anunció la aplicación de un estado de



excepción y el pueblo ecuatoriano respondió aumentando la movilización social.

Miles de indígenas marcharon hacia Quito, sumándose a las protestas urbanas que fueron llegando a niveles más altos de tensión cuando el gobierno declaró un toque de queda. Después de cientos de detenidos, heridos, y la difusión de videos donde era posible ver las detenciones arbitrarias y violaciones de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, Moreno se vio obligado a instalar una mesa de diálogo con la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE), y finalmente, a derogar el decreto 883 de aumento del precio de los combustibles. Sin embargo, posterior a ello el conflicto continuó con la variable de división entre los sectores movilizadores, particularmente entre la CONAIE y el correísmo.

Después de la instalación de la mesa de negociación y derogación del decreto, el presidente Moreno inició una persecución política contra los sectores de la oposición, dentro de los que encuentran los casos de detención de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el del luchador social y militante de Bulla Zurda Christian González y de varios legisladores correístas que decidieron buscar refugio en la embajada de México, como sucede con la asambleísta Gabriela Rivadeneira que se encuentra refugiada allí desde entonces.

Por otra parte, también se desplegaron una serie de acciones de estigmatización contra la organización indígena que los señalaba de tener intenciones de crear un «ejército subversivo». Finalmente, la mesa de negociación se suspendió y los sectores de la CONAIE propusieron la creación de un Parlamento Popular de los Pueblos constituido por Asambleas territoriales como un escenario de creación de propuestas

políticas y económicas para presentar al gobierno nacional, con el objetivo de construir un nuevo modelo económico que evite un futuro «paquetazo». En este sentido, más allá de la represión, encarcelamiento y procesamiento de líderes y líderes políticos y sociales y activistas, el conflicto sigue abierto.



Haití en llamas

Desde hace al menos dos meses Haití parece estar sobre un polvorín. Durante el mes de octubre las protestas reiniciadas en septiembre se masificaron y alcanzaron mayores niveles de radicalidad, al tiempo que la represión también se acentuó. De acuerdo a información difundida por la ONU, desde el 16 de septiembre hasta fines de octubre 42 personas perdieron su vida en las protestas, al menos 19 de ellas a causa de la acción de las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Jovenel Moïse¹³. Entre ellos se cuenta el asesinato del periodista Néhémie Joseph, quien fue secuestrado y de inmediato muerto a balazos el 10 de octubre mientras cubría las movilizaciones.

El presidente es el blanco principal de las protestas, a través de las cuales la mayoría de la población haitiana exige activamente su renuncia inmediata. El fondo del malestar tiene que ver con la crítica situación económica y política, con un incremento de la inflación, desabastecimiento energético y fuertes evidencias de corrupción que involucran hasta al propio mandatario. De acuerdo a un informe que la Corte Superior de Cuentas del Estado haitiano envió al Parlamento en mayo de este año, basado en su investigación sobre actos de corrupción con fondos de Petrocaribe, el desfalco al pueblo haitiano alcanza la cifra de 2 mil millones de dólares, parte de los cuales fueron recibidos por la empresa Agritrans —propiedad de Moïse—,

que nunca ejecutó los proyectos, que deberían haber sido destinados a ayudas sociales¹⁴. En este contexto, las medidas de boicot a Petrocaribe impulsadas por el gobierno de Donald Trump agudizaron el desabastecimiento de combustible y la situación social.

De acuerdo a la mirada de Camille Chalmers, economista y coordinador de la Plataforma PAPDA —y uno de los referentes del Foro Patriótico, que aglutina a más de 60 organizaciones, entre movimientos sociales campesinos y urbanos, partidos políticos de izquierda, sindicatos y centrales sindicales, organizaciones juveniles y de mujeres, entre otros— «se puede decir que en la actualidad prácticamente todas las fuerzas sociales y políticas del país están en contra de Jovenel Moïse»¹⁵. Entre ellas incluye a ex aliados como las cámaras de comercio, el Foro Económico Privado, la Iglesia Católica e incluso familias de la oligarquía tradicional, lo que da una idea de la magnitud de la crisis al interior de los sectores más acomodados. Estos sectores en las últimas semanas se han mostrado cercanos a la oposición conservadora aglutinada en la llamada Alternativa Consensual, que promueve una Comisión de Apoyo para el Traspaso del Poder.



Sin embargo, el gobierno continúa apoyado por el grupo el autodenominado «grupo de amigos de Haití», más conocido como Core Group (literalmente, Grupo Central en inglés), integrado por representantes de la ONU, la OEA, la Unión Europea y los embajadores de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España y Brasil. Contra este espacio se registraron en octubre varias movilizaciones en reclamo del cese de la injerencia extranjera, en parte motorizadas por las organizaciones que componen el Foro Patriótico, que plantea lo que sus dirigentes denominan «una transición de ruptura».

En este contexto, el 15 de octubre concluyó luego de dos años la tarea de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia de Haití (MINUJUSTH), octava «misión internacional» que desembarca en territorio haitiano desde el primer golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide, impulsado en 1991 con participación activa de potencias como Estados Unidos y Francia. Pero la MINUJUSTH de inmediato fue reemplazada por la novena Misión, conocida como BINUH (Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití), con un mandato inicial de un año, que podría ser prorrogado y la conducción de Helen La Lime, diplomática estadounidense.

Hacia principios de noviembre, la situación está lejos de estabilizarse y el conflicto continúa abierto, con un panorama donde se generalizan la violencia y la tensión social.

Notas

¹³ ONU: Suman 42 muertos durante protestas en Haití (1º de noviembre de 2019). teleSUR. Recuperado de <https://www.telesurtv.net/news/protestas-haiti-muertos-reporte-onu--20191101-0014.html>

¹⁴ Lautaro Rivara, sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines: «El presidente Jovenel Moïse sigue sostenido por los EEUU» (3 de octubre de 2019). Nodal. Recuperado de <https://www.nodal.am/2019/10/lautaro-rivara-sociologo-y-miembro-de-la-brigada-dessalines-de-solidaridad-con-haiti-el-presidente-jovenel-moise-sigue-sostenido-por-los-eeuu/>

¹⁵ «El imperialismo norteamericano se vale de Haití para sabotear la unidad regional»: entrevista a Camille Chalmers (11 de octubre de 2019). teleSUR. Recuperado de <https://www.telesurtv.net/opinion/El-imperialismo-norteamericano-se-vale-de-Haiti-para-sabotear-la-unidad-regional-entrevista-a-Camille-Chalmers-20191011-0011.html>



Honduras: proceso judicial en EE. UU. y movilizaciones “contra el narcogobierno”

El proceso de deslegitimación del gobierno de Juan Orlando Hernández se ha consolidado con el paso de tiempo por distintas razones que lo vinculan no solamente con escándalos de corrupción, sino recientemente con el fallo de la Corte de Nueva York que encontró culpable del delito de narcotráfico y tráfico de armas al hermano del presidente, Tony Hernández, proceso en el cual también está involucrado el mismo presidente y otros ex presidentes de Honduras.

Estos elementos se suman al fuerte rechazo que desde los movimientos populares se plantea hacia el presidente hondureño por sus políticas persecutorias de las organizaciones sociales –incluso en octubre fueron asesinados varios ambientalistas–, e inclusive por su responsabilidad política en el asesinato de Berta Cáceres, para favorecer a los empresarios de la Hidroeléctrica contra la que Cáceres hacía militancia.

Por otra parte, el escándalo por el proceso de narcotráfico de la familia Hernández se enmarca en un proceso de «narcotización» del Estado Hondureño posterior al Golpe de Estado emprendido contra Manuel Zelaya en el 2009. Dentro

del proceso judicial que involucra también a ex mandatarios hay numerosas pruebas que señalan los vínculos de la familia con redes de narcotráfico en los Estados Unidos de los cuales obtuvieron sobornos con el fin de financiar las campañas de 2010, 2013 y 2017, elementos que se suman a los casos de 11 diputados del Partido Nacional que han sido también vinculados con la dinámica local de narcotráfico, además de funcionarios públicos y Ministros, todos dependientes de la institucionalidad del Estado de Honduras.

Estas variables, sumadas al agotamiento de la sociedad hondureña respecto de la profundización de la violencia que llega a la cifra de más de 41 homicidios cada 100.000 habitantes, y la pobreza y pobreza extrema –que alcanzan el 52,6% y el 17,2% de la población respectivamente¹⁶– condujeron a una serie de movilizaciones callejeras que incluyeron bloqueos y tomas de avenidas protagonizadas por los sectores juveniles y estudiantiles convocadas por la Coalición de Oposición contra la Dictadura integrada por el ex presidente Manuel Zelaya y otros sectores de la oposición.



Las concentraciones se dieron principalmente en Tegucigalpa -en el Bulevar de las Fuerzas Armadas, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- donde se exigió la renuncia del presidente y se denunció la existencia de un narcogobierno que, además de ser delincuencial, es empobrecedor, saqueador de los recursos naturales, criminalizador del movimiento social y campesino hondureño, y servil a los intereses de Donald Trump especialmente en el tratamiento a las masivas migraciones que salen del país centroamericano con destino a los Estados Unidos.



Notas

¹⁶ Informe Banco Mundial para Honduras (Octubre de 2019). Banco Mundial. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview>

Panamá: Movilizaciones contra las reformas constitucionales

Durante el mes de Octubre diferentes sectores sociales liderados por los docentes y estudiantes universitarios se han movilizado en las calles de Panamá en rechazo a las reformas constitucionales que según el movimiento social se está adelantando de manera ilegítima e inconsulta con los sectores populares.

El texto que está siendo debatido por lo diputados de Asamblea Nacional, y del cual ya han sido aprobados 94 artículos, plantea una serie de modificaciones regresivas en materia de derechos. Entre otras: la regulación por ley de la migración para garantizar «la seguridad nacional, la salud pública y la protección laboral para los nacionales», la caracterización de la figura de familia como una institución constituida por «un hombre y una mujer», la posibilidad de que los diputados puedan modificar el presupuesto nacional, la modificación del mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el financiamiento de la educación privada con fondos públicos¹⁷.

La propuesta de los sectores sindicales se concentra en mantener la movilización para llamar a una Constituyente Originaria a partir de la deslegitimidad que tiene la Asamblea Nacional que adelantó esta serie de modificaciones a la Carta Magna. Durante las distintas protestas callejeras se detuvieron 96 manifestantes en el tratamiento represivo que la Fuerza Pública dio a los sectores en movilización¹⁸.



Notas

¹⁷ Una mirada final al texto final de las polémicas reformas constitucionales. Recuperado de <https://www.nodal.am/2019/10/panama-una-mirada-al-texto-final-de-las-polemicas-reformas-constitucionales/>

¹⁸ Siguen las protestas contra las reformas y piden convocar una constituyente originaria, Recuperado de <https://www.nodal.am/2019/10/panama-siguen-las-protestas-contras-las-reformas-y-piden-convocar-una-constituyente-originaria/>





Disputas en el terreno electoral e institucional

En un continente conmovido por las movilizaciones sociales, el mes de octubre también fue rico en procesos electorales de importancia. A estos procesos se le sumó el desarrollo de la crisis institucional en Perú, donde producto de manifestaciones sociales y la decisión del Ejecutivo se cerró el Congreso y se adelantaron elecciones en enero de 2020.

Bolivia: del triunfo electoral de Evo a la gestación del golpe de Estado

El 20 de octubre tuvo lugar en Bolivia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ellas el presidente Evo Morales y candidato por el MAS-IPSP obtuvo el 47,08% de votos válidos y superó por 10,57 puntos al candidato de la coalición Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien obtuvo el 36,51¹⁹, más de lo que se esperaba de acuerdo a sondeos preelectorales²⁰. En el último período de campaña, Mesa logró polarizar la elección y arrebatarse casi todos los votos al candidato Oscar Ortiz Antelo, del Movimiento Demócrata Social, quien finalmente terminó cuarto con el 4,24%, debajo de la sorpresa de la elección, el pastor evangélico y activista contra la diversidad sexual, Chi Hyun Chung, quien obtuvo el 8,78% de los sufragios.

De este modo, Morales alcanzó la tercera reelección en virtud de superar el piso del 40% de los votos con una diferencia mayor a los 10 puntos porcentuales, exigidos por la Constitución para triunfar sin necesidad de ir al balotaje. A su vez, el partido gobernante también alcanzó la victoria en las elecciones parlamentarias, desarrolladas en simultáneo: logró el número de 68 diputados, sobre un total de 130 y de 21 senadores, sobre un total de 36 escaños²¹. De esta manera, el MAS-IPSP logró mayoría absoluta en ambas cámaras.

Sin embargo, el resultado electoral favorable al presidente Morales se vio empañado por el desconocimiento de la oposición. Esta reacción tuvo lugar tras una demora en la publicación del resultado electoral, que si bien estaba prevista habilitó diferentes especulaciones. En la noche del domingo 20, el conteo rápido se interrumpió cuando todavía no se habían escrutado el 100% de los votos. En ese momento, Evo Morales obtenía una ventaja apenas por debajo del 10%, aunque los datos que restaban cargar en su mayoría correspondían a áreas rurales, donde el presidente históricamente logra una gran diferencia. Al completar el conteo oficial, la distancia fue mayor al 10% pero ya la oposición difundía la denuncia de fraude, exigiendo la realización de la segunda vuelta.

Con el correr de las horas y los días, seguidores de la oposición y del gobierno comenzaron a realizar movilizaciones, que en algunos casos derivaron en hechos de violencia. A partir de allí se precipitó el inicio de una crisis política que aún se encuentra en desarrollo.

En medio de este panorama, al día siguiente de la elección, la Misión de Observación Electoral de la OEA publicó un comunicado tomando abierto partido por la posición expresada por el candidato perdedor. Entre otros puntos, la



declaración señaló su «profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas».

«A las 19.40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. Nuestra información fue compartida hoy con el TSE y la Cancillería», agregó, equiparando en forma inédita el conteo del órgano oficial boliviano con el «ejercicio estadístico» de los observadores del organismo supranacional. «A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la Misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta», continuó²². A esta posición de abierta injerencia se sumaron el gobierno de EE. UU y aliados como los gobiernos de Brasil y Argentina.

Seguro del resultado, el gobierno boliviano contraatacó denunciando un intento de golpe de Estado en curso y proponiendo a la OEA la realización de una auditoría donde se cuente “voto por voto”. La propuesta finalmente fue aceptada por la OEA y en principio también por Mesa, quien luego se desdijo y rechazó la verificación. En paralelo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, principal organización social opositora, con influencia en el oriente boliviano, declaró que “no vamos a aceptar ninguna auditoría, queremos que se anulen las elecciones”. Este Comité, liderado por el abogado y asesor de

empresas Luis Fernando Camacho, es el principal bastión de los sectores derechistas y con el correr de los días ha ido ganando en protagonismo, con una radicalización de las acciones que viraron hacia la violencia abierta contra instituciones, personas y símbolos identificados con el gobierno del MAS-IPSP.

En esta dirección, ya entre el 7 y el 8 de noviembre –fuera del periodo que cubre este informe– se sumó al conflicto el amotinamiento de las fuerzas policiales de las principales ciudades y una movilización de las fuerzas derechistas que ocuparon la ciudad de La Paz precipitando entre el sábado 9 y el domingo 10 el cerco policial y civil al gobierno, luego el pedido de renuncia del presidente realizado por las Fuerzas Armadas y, finalmente, la conclusión del golpe de Estado con la resignación del cargo por parte de Evo Morales, Álvaro García Linera y los dirigentes en la línea de sucesión.



Notas

¹⁹ Publicación de resultados nacionales. Elecciones generales 2019 (Noviembre de 2019). Órgano Electoral Plurinacional. Recuperado de https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2019/11/Separata_Resultados_Nacionales_EG_2019.pdf

²⁰ Bolivia: Un escenario electoral muy despejado (27 de agosto de 2019). CELAG. Recuperado de <https://www.celag.org/bolivia-un-escenario-electoral-muy-despejado/>

²¹ MAS logra mayoría en Cámara de Senado y Diputados de Bolivia (28 de octubre de 2019). teleSUR. Recuperado de <https://www.telesurtv.net/news/bolivia-mas-mayoria-camara-senado-diputados-elecciones-20191028-0014.html>

²² Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia (21 de octubre de 2019). Organización de Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-085/19

Uruguay: el Frente Amplio y el Partido Nacional al balotaje

Apenas una semana después que en Bolivia, el 27 de octubre se realizaron en Uruguay las elecciones presidenciales por medio de las cuales el gobernante Frente Amplio intentó revalidar el gobierno por cuarta vez, en este caso con la candidatura del ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez. El resultado ubicó en primer término a la formación de centroizquierda, aunque sin el número suficiente para triunfar en primera vuelta, al no haber alcanzado superar el 50% de los votos, tal como lo plantea la Constitución del país.

Los cómputos finales otorgaron a Daniel Martínez (FA) el 39,03%, seguido por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) con el 28,65%. Así, Lacalle alcanzó a la posibilidad de disputar el balotaje que se realizará el 24 de noviembre. Más atrás quedaron Ernesto Talvi (Partido Colorado) con el 12,34% y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) con el 11%. Otros siete candidatos alcanzaron valores entre el 1,37% y el 0,06%, sumando, en un conjunto heterogéneo, algo menos del 5%²³.

De cara a la segunda vuelta, tanto Talvi como Manini Ríos se expresaron en favor de la candidatura de Lacalle Pou, con quien comparten un mismo espectro ideológico en términos

amplios. Esto configura un escenario con una ventaja inicial de la actual oposición, aunque no necesariamente la sumatoria de votos será lineal en función de las opciones de primera vuelta y los acuerdos entre dirigentes, por lo que el Frente Amplio aún conserva cierta expectativa.

En forma simultánea se desarrollaron también las elecciones parlamentarias, que dieron como resultado que ninguna formación política tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras, aunque sí existe la posibilidad de que los partidos alineados a la derecha del arco político —el Partido Nacional, el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), el Partido de la Gente y el Partido Independiente (PI)— alcancen la mayoría en caso de coordinar como si fueran un bloque.

En la Cámara Alta, el Frente Amplio perdió dos escaños al pasar de 15 a 13 senadores, mientras que el Partido Independiente perdió el único senador que renovaba. Los tres puestos fueron obtenidos por el nuevo partido de derecha, Cabildo Abierto, que a pesar de formarse en marzo de este año irrumpió con fuerza en la elección. El Partido Nacional y el Partido Colorado mantuvieron sus bancas (10 y 4, respectivamente)²⁴.



En la Cámara Baja tendrán representación siete partidos: el Frente Amplio tendrá 41 bancas (nueve menos que en 2014); el Partido Nacional, 31 (una menos) y el Partido Colorado mantendrá las 13 que tenía. Cabildo Abierto se incorpora con 11 y el Partido Independiente, el Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido de la Gente tendrán una cada uno²⁵.

Además, uruguayas y uruguayos fueron convocados a votar en el plebiscito para aprobar o no la propuesta de Reforma Constitucional denominada “Vivir sin Miedo”, impulsada por el senador del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga. La iniciativa planteaba cuatro puntos: la creación de una Guardia Nacional militarizada, la prohibición de libertad anticipada para determinados delitos, cadena perpetua revisable y la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos con orden judicial, prohibidos hasta el momento. De acuerdo a la legislación, el proyecto necesitaba más de 50% de los votos válidos para ser aprobado y solo consiguió el 46,3% por lo que fue rechazado por escaso margen²⁶.

Notas

²³ Mirá todos los resultados de las elecciones de octubre 2019 (4 de noviembre de 2019). El País. Recuperado de <https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/quienes-entran-quienes-camara-senadores-elecciones.html>

²⁴ El nuevo Parlamento: muchas caras nuevas y varias bancas por definirse (28 de octubre de 2019). La Diaria. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/el-nuevo-parlamento-muchas-caras-nuevas-y-varias-bancas-por-definirse/>

²⁵ Ibidem.

²⁶ La reforma constitucional Vivir sin Miedo fue rechazada (27 de octubre de 2019). La Diaria. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/la-reforma-constitucional-vivir-sin-miedo-fue-rechazada/>



Argentina: derrota de Macri en primera vuelta, Alberto Fernández electo presidente

El 27 de octubre también se realizaron unas trascendentales elecciones en Argentina, en las cuales se ratificaron los resultados más importantes de las primarias de agosto. En primer lugar, la victoria del peronista Alberto Fernández (Frente de Todos), quien tuvo como compañera de fórmula a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y superó el 48% de los votos, imponiéndose al presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio, 40%). En segundo lugar, el triunfo de Axel Kicillof en la elección de gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires, la más poblada del país: el exministro de Economía de CFK superó el 52% y venció a la actual gobernadora María Eugenia Vidal, quien en su momento estaba llamada a ser una futura carta de recambio neoliberal y apenas alcanzó el 38%²⁷.

Si bien la distancia entre ambas coaliciones electorales fue menor a las primarias, en un contexto de alta polarización, lo cierto es que el triunfo de la fórmula Fernández - Fernández marca un cambio significativo en el tablero político continental, al suponer una pérdida para EE. UU. de un aliado incondicional en la región y un castigo al gobierno por los efectos de las políticas neoliberales. Al mismo tiempo, la distancia de 8 puntos y la definición de la elección sin necesidad de recurrir a la segunda vuelta es un dato contundente. Macri

se convierte en el primer presidente argentino en intentar sin éxito la reelección y esto tiene que ver con la desaprobación generalizada de su gestión²⁸, a partir del fracaso de su política económica.

En términos geopolíticos, un dato destacable fue la actitud tomada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se negó a felicitar a Alberto Fernández y señaló que “Argentina eligió mal”.



Notas

²⁷ Argentina Elecciones 2019. Recuento Provisional de Resultados (28 de octubre de 2019). Presidencia de la Nación. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Dirección Nacional Electoral. Recuperado de <https://www.resultados2019.gob.ar/>

²⁸ Clima electoral en Argentina (Octubre 2019). CELAG. Recuperado de <https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/10/Argentina-Informe-Oct-2019.pdf>



Perú y la crisis parlamentaria: Elecciones 2020 y alianzas

La disolución del Congreso resuelta a final del pasado mes de septiembre, producto de un proceso de deslegitimidad de los parlamentarios frente a la sociedad peruana, y de una propuesta adelantada por el presidente Martín Vizcarra, cambió de forma radical el escenario político peruano de cara a las elecciones del nuevo Congreso en Enero de 2020. Si bien Vizcarra adelantó, a partir de sus facultades presidenciales, la disolución del Congreso, es importante señalar que ello parece no expresar tanto la disposición a escuchar las exigencias de los movimientos sociales como una manifestación de la disputa al interior del bloque dominante alrededor del control del aparato de estado que contrapone a la tradición de la derecha fujimorista y aprista con las representaciones que, bajo el manto de la democracia liberal y la programática anticorrupción, son cercanas al Grupo de Lima y las recetas económicas ortodoxas.

Durante Octubre, 17 partidos políticos confirmaron su concurrencia a las elecciones parlamentarias de enero próximo, con la claridad de que dentro de los posibles candidatos no pueden estar incluidos los nombres de los ex congresistas del organismo disuelto. En ese marco, diferentes sectores políticos intentan construir herramientas electorales en los

pocos meses previos a las elecciones para lograr escaños en el parlamento.

Una de las principales candidaturas es la de Verónica Mendoza, referente progresista del partido Nuevo Perú, quien configura un liderazgo importante orientado hacia los sectores de la juventud y la lucha de las mujeres. La decisión de la candidata en el inicio de la campaña de conformar una alianza política con los sectores de la izquierda peruana liderados por Vladimir Cerrón a partir de su coincidencia en la necesidad de consolidar una Asamblea Nacional Constituyente generó varias renuncias en su partido, sin embargo Mendoza sostuvo su decisión de avanzar en una alianza que fortalezca la defensa del proyecto político de la ANC como la alternativa que necesita Perú para salir de la crisis institucional que atraviesa.

En este sentido, tanto Mendoza, como Cerrón, a pesar de haber estado de acuerdo con la medida de disolución del Congreso adelantada por el presidente —iniciativa que además adelantó en la lucha callejera en el marco de las diferentes movilizaciones— se mantienen en firme oposición al gobierno de Vizcarra.





Avances y contragolpes del bloque neoliberal conservador

En el contexto de un panorama de cuestionamientos a las políticas de ajuste, de todas maneras es posible registrar también avances en las acciones por parte del bloque identificado con la estrategia geopolítica de EE. UU. Entre ellos, ya mencionamos el despliegue de las formas de la guerra híbrida en Bolivia que culminaron con el golpe de Estado en ese país. A continuación, incluimos otras situaciones que, en este mismo sentido, consideramos relevantes.

Brasil: de las contrarreformas económicas y geopolíticas a Lula Libre

En el gigante del Sur, la ofensiva neoliberal en el terreno económico y social promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro parece no detenerse y logró en octubre –aún en un contexto de disputas internas y caída de la popularidad– dos éxitos de relevancia.

Por un lado, luego de varios meses de trámite parlamentario, finalmente el 22 de octubre el Senado, por 60 votos a favor, 19 en contra y una ausencia, dio media sanción a la reforma previsional dirigida a reducir el déficit fiscal a costa de un aumento en la edad de jubilación a 65 años para los hombres y a 62 años para las mujeres. La reforma afecta a las personas empleadas en el sector público y en el privado, con excepción de trabajadores rurales, profesores y policías que podrán jubilarse con edades que varían entre los 55 y los 60 años²⁹.

El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó por 329 a 86 votos la autorización para que EE.UU. utilice la estratégica Base Aeroespacial de Alcántara, en el norte del país. En caso de ser aprobado también en el Senado, el acuerdo tendrá validez por 20 años³⁰.

De acuerdo a evaluaciones basadas en declaraciones del ministro de Economía, Paulo Guedes, las políticas de ajuste continuarán con un intento de reducir la inversión en salud y educación (que ya perdieron en los últimos tres años un 15,6% y un 28,4%, respectivamente), así como con la pretensión de privatizar las principales empresas estatales, en el marco de un plan estratégico bautizado por el gobierno como “Caminho para a Prosperidade”³¹.

Estos avances en su programa económico y geopolítico no implican, sin embargo, que el gobierno de Bolsonaro esté exento de dificultades. A una crisis al interior de su propio partido —expresada públicamente a través de una disputa por el liderazgo del bloque en la Cámara de Diputados entre un sector más afín y otro que responde a su enemigo interno, Luciano Bivar, quien es el presidente del PSL— hay que sumarle otras situaciones de mayor voltaje político. En un contexto de de políticas económicas regresivas y escándalos de todo tipo —donde también hay que anotar las revelaciones acerca de los vínculos entre los asesinos de Marielle Franco y el propio presidente—, pareciera existir una pérdida de popularidad del mandatario. De acuerdo a João Pedro Stedile, referente



del MST, «la sociedad brasileña está atónita con su discurso y su práctica» y tiende a quedar cada vez más aislado³². Este desgaste de la figura de Bolsonaro ya fue registrado por sondeos en los meses previos³³.

Por último, en un contexto de creciente deslegitimación del proceso judicial que culminó con el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva en abril de 2018, a principios de noviembre el Superior Tribunal Federal (STF) resolvió, por diferencia de un voto, en contra de la prisión para aquellos enjuiciados que no tuvieran condena firme. En este sentido, el sábado 9 de noviembre Lula salió finalmente de su lugar de detención en Curitiba luego de 580 días de encarcelamiento. Ya en libertad, Lula se comprometió a seguir su lucha contra las políticas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro y por la integración nuestroamericana.



Notas

²⁹ Aprobaron en Brasil la reforma previsional de Jair Bolsonaro (23 de octubre de 2019). La Nación. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/aprobaron-en-brasil-la-reforma-previsional-de-jair-bolsonaro-nid2299640>

³⁰ Câmara aprova entrega de Alcântara aos EUA, com restrições ao Brasil no uso da base (23 de octubre de 2019). Brasil de Fato. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/10/23/camara-aprova-entrega-de-alcantara-aos-eua-com-restricoes-ao-brasil-no-uso-da-base/>

³¹ Após reforma da Previdência, Guedes prepara ataques a saúde e educação (25 de octubre de 2019). Brasil de Fato. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/10/25/apos-reforma-da-previdencia-guedes-prepara-ataques-a-saude-e-educacao/>

³² Stedile: sin base ni proyecto, Bolsonaro tiende a quedarse cada vez más aislado (2 de octubre de 2019). Brasil de Fato. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/10/02/stedile-sin-base-ni-proyecto-bolsonaro-tiende-a-quedarse-cada-vez-mas-aislado/>

³³ Início de governo Bolsonaro tem maior índice de reprovação desde Sarney, diz Ibope (25 de septiembre de 2019). Brasil de Fato. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/09/25/inicio-de-governo-bolsonaro-tem-maior-indice-de-reprovacao-desde-sarney-diz-ibope/>



EE.UU. y tratado con el Triángulo Norte por asilo migratorio

Durante el mes de octubre, el gobierno de Donald Trump consolidó un tratado con el llamado Triángulo Norte de América Central —Guatemala, Honduras y El Salvador—, sobre «asilo migratorio». En distintas manifestaciones del presidente Donald Trump ha felicitado a estos países por las políticas de control migratorio que están adelantando, caracterizadas por la militarización de las fronteras y la contención de los y las migrantes dentro de sus límites territoriales evitando su paso a México.

En los llamados Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) adelantados por el Secretario Interino de Seguridad de Estados Unidos, Kevin Mc Aleenan con los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras, los países del Triángulo Norte se comprometen a brindar «asilo» a los migrantes de otras nacionalidades que lleguen a cruzar las fronteras estadounidenses. Sin embargo, en el caso de El Salvador, a pesar de haber firmado dicho acuerdo, el presidente Nayib Bukele anunció que no había posibilidades reales en el país para dar condiciones dignas a quienes soliciten el asilo.

Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino de la Casa Blanca declaró en una rueda de prensa del pasado 17 de Octubre que los Estados Unidos habían congelado los recursos de cooperación con el Triángulo Norte hasta que no decidieran cambiar sus políticas de migración, para que fueran favorables a los intereses del gobierno de Donald Trump. Según

manifestaciones del Secretario de Estado, Mike Pompeo, la ayuda económica - de más de US\$150 millones-³⁴ se detendría «hasta que sus respectivos gobiernos adoptaran medidas suficientes para reducir la abrumadora cantidad de migrantes que llegan a la frontera de EE.UU».

Joe Biden, abierto contendor político del gobierno de Trump, ex vicepresidente de Estados Unidos y precandidato del Partido Demócrata, criticó fuertemente la decisión de condicionar dichas ayudas a los países del Triángulo Norte a los acuerdos migratorios anunciados por Donald Trump, y obviar las razones que causan la migración en estos países centroamericanos.

Después de la firma de estos tratados, Estados Unidos decidió liberar los fondos congelados en marzo para el «apoyo a iniciativas del sector privado para generar oportunidades económicas, fortalecimiento del estado de Derecho, afianzamiento institucional, la buena gobernanza y desarrollo de capacidades para implementar los convenios migratorios»



Notas

³⁴ Trump reinstating 150 millions in aid to Central America. Recuperado de <https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-reinstating-150m-in-aid-to-central-america>



Profundización del Bloqueo contra Cuba

Octubre también fue el mes en el que EE.UU. continuó endureciendo el bloqueo comercial y financiero contra Cuba de forma unilateral, como sucede desde hace varios meses. Entre otras políticas, en este mes el gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas para limitar la exportación de bienes destinados a mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones en la isla, así como nuevas presiones para que compañías de terceros países suspendan vínculos económicos con empresas cubanas. Las nuevas restricciones se suman así a una larga batería de acciones dirigidas a desestabilizar la economía del país caribeño.

Entre los efectos denunciados públicamente por el gobierno cubano, las acciones tuvieron como efecto la cancelación el cese de contratos de arrendamiento ya suscriptos entre Cubana de Aviación y arrendatarios de varios países, lo que provocó la cancelación de vuelos internacionales entre La Habana y Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y Point de Pitre.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura de Cuba denunció este miércoles que los daños a causa del bloqueo superan los 345 millones de dólares en el sector agrícola entre abril del 2018 y marzo del 2019, lo que representa un 7,9 por ciento del total de afectaciones sufridas por el país en ese periodo de tiempo³⁵.

Ante esta situación, el gobierno de Cuba se orienta a redoblar los acercamientos a países con una política exterior más soberana. En este marco se encuadran la firma de convenios bilaterales y las conversaciones oficiales con terceros países, entre las que se destaca especialmente la visita a México del presidente Miguel Díaz Canel, quien se reunió con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador el 17 de octubre, en su primer viaje oficial luego de que fuera electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular como presidente de Cuba el 10 de octubre.



Notas

³⁵ Cuba denuncia freno agrícola por bloqueo impuesto por EE.UU. (23 de octubre de 2019). teleSUR. Recuperado de <https://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncia-freno-agricola-bloqueo-impuesto-eeuu-20191023-0038.html>



Venezuela, termómetro de la disputa continental

Durante el primer semestre de 2019, la avanzada neoliberal conservadora reunida en el Grupo de Lima atacó sistemáticamente a Venezuela con el objetivo de promover un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro –incluso amenazando con una intervención militar externa- sin lograr ninguno de sus objetivos. A ello, se sumó el recrudecimiento del bloqueo orientado desde los Estados Unidos que ha impactado de forma material y concreta a la sociedad venezolana, con medidas orientadas a golpear la entrada de alimentos, medicinas e insumos básicos de consumo.

Aunque estas medidas económicas coercitivas continúan, y el asedio no cesa, en términos políticos, es posible evidenciar una crisis de legitimidad del bloque protagonizado por los países del Grupo de Lima. No solamente diferentes países de América Latina en el marco de la última Asamblea General de la ONU enfatizaron su rechazo a una posible intervención militar, sino que en la región, como hemos señalado durante este informe, ha crecido el rechazo a las políticas neoliberales y a los propios gobiernos que conforman dicho grupo.

De esta manera, los argumentos en defensa de la «democracia» y contra el uso de la fuerza que tanto enarbolaban contra el proceso bolivariano, se convirtieron en su propia mordaza. El tratamiento militarizado de la protesta social signado por

numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos fue el método antidemocrático por excelencia que utilizaron los gobiernos de modelo neoliberal como el de Sebastián Piñera de Chile, Lenin Moreno de Ecuador e Iván Duque de Colombia.

Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno logró consolidar durante el mes de octubre una Mesa de Diálogo Nacional concertada con diferentes sectores de la oposición, entre los que se encuentran figuras como Timoteo Zambrano de la MUD, Claudio Fermín de Soluciones para Venezuela, el líder opositor Enrique Ochoa Antich; y de la que permanecen fuera los sectores más azuzado por los Estados Unidos expresados en Juan Guaidó. Dicha mesa concretó, además de acuerdos iniciales alrededor del rechazo a las sanciones económicas, tres mesas temáticas de trabajo: Área Económica, Partidos Políticos y Frente Electoral, a través de los cuales se avanza en una negociación en el marco de las leyes orgánicas de la Constitución.



Apuntes finales

En cuanto a un análisis general, el continente presenta un panorama diverso aunque atravesado por algunas tendencias generales que aparecieron con fuerza en las últimas semanas. En este contexto, cabe preguntarse en qué medida las movilizaciones y los cambios institucionales del período expresan una crisis general de legitimidad o de hegemonía del proyecto neoliberal-conservador y, en tal caso, qué grado de profundidad tiene este rechazo y cómo puede cristalizar en nuevas relaciones de fuerza. También es clave dar seguimiento a las formas de asedio y desestabilización a los gobiernos populares que, en un contexto previo de dificultades, mantuvieron posiciones contrapuestas a la agenda imperial y neoliberal. En este sentido, las formas y ritmo que asumió la guerra híbrida en Bolivia y la conclusión final del golpe de estado requiere tanto su examen detenido como plantea interrogantes sobre los modos populares de contrarrestar estas estrategias.

A su vez, en el caso de las expresiones de rechazo al modelo neoliberal, es evidente el intento por contener estas protestas y cuestionamientos haciendo un uso masivo de la violencia con un papel central para las fuerzas represivas, que en pocas semanas han dejado un saldo de decenas de personas asesinadas y miles de heridos, detenidos y procesados en

diferentes países de la región. A diferencia de otros momentos históricos —por ejemplo, a principios de este siglo, cuando episodios similares lograron cambios de gobierno— ahora pareciera haber una mayor disposición por parte de gobiernos derechistas a amurallarse detrás de una combinación de alta coerción y manipulación mediática, combinadas, en última instancia, por alguna compensación o cambio mínimo aceptados como un mal menor. Esta práctica estatal del despliegue de la represión durante varias semanas al costo que sea, es visible en el caso de Chile y especialmente en Haití, y también en Ecuador. En este plano se puede también reflexionar sobre los diferentes tratamientos que los medios masivos de comunicación y los organismos internacionales, en tanto actores políticos, le otorgan a la situación de cada país, según su cercanía ideológica y política.

Otra incógnita relacionada con la coyuntura tiene que ver con la forma en que estos acontecimientos pueden alterar los planes estratégicos que el capital más concentrado y el imperialismo despliega en el continente y generar cambios de sus estrategias y otras plataformas para las alternativas. En este sentido ¿puede ponerse un límite a la presión por «reformas estructurales» regresivas, propias de la etapa vigente hasta ahora? ¿Es posible que estos procesos de rechazo



al neoliberalismo construyan condiciones para una nueva etapa donde primen la participación democrática efectiva, la soberanía y la integración con perspectiva emancipatoria? ¿Cómo afectarán a las relaciones entre los Estados, así como entre los diferentes movimientos populares y proyectos políticos en torno a estos temas? ¿Qué posibilidades y alternativas se plantean para los gobiernos electos en base a las aspiraciones populares? ¿Cómo contrarrestar las estrategias y fuerzas de las que dispone el gran capital y el imperialismo para contener o ahogar estos procesos? En un escenario abierto, las respuestas a estas preguntas la darán ciertamente los pueblos de Nuestra América en los días, semanas y meses por venir.





 [thetricontinental](#)

 [tri_continental](#)

 [thetricontinental](#)

 americalatina@thetricontinental.org

www.eltricontinental.org